

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD**

Bogotá D. C., 10 de noviembre de dos mil veinte (2020)

Proceso fijación de Alimentos

Radicado 2019-0033

En atención a que no hay pruebas pendientes por recaudar y que las solicitadas son documentales y obran en el proceso, procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda en aplicación a lo dispuesto en el art. 390 del C.G.P., en concordancia con el numeral 2 del artículo 278 ibídem.

**ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO** y el señor **JAVIER BERNAL** en representación del menor **JAVIER BERNAL CUERVO** presentaron demanda contra la progenitora **LUZ ADRIANA CUERVO HOLGUIN**, solicitando se determine el monto de la cuota alimentaria que por ley le debe suministrar la demandada, que consideran debe serlo en cuantía de trescientos mil pesos (\$300.000), para cada uno.

El fundamento factico de su pretensión en lo pertinente se contrae a que **JAVIER BERNAL** y **LUZ ADRIANA CUERVO HOLGUIN** son los padres de **ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO** y del menor al momento de la presentación de la demanda (hoy mayor de edad) **JAVIER BERNAL CUERVO**, nacidos en esta ciudad, el 5 de octubre de 1999 y 5 de mayo de 2001.

Adujo que la demandada no cumple con sus obligaciones alimentarias.

La demanda fue admitida por auto del 28 de enero de 2019 y notificada a la demandada en los términos de los artículos 291 y 292 del C.G.P., advirtiéndose que la demandada dentro del término que la ley le otorgaba para hacer uso de su derecho de defensa guardó silencio.

### **CONSIDERACIONES**

Ningún análisis soporta los presupuestos procesales, pues se encuentran reunidos a cabalidad en el presente asunto y no se observa causal de nulidad alguna con entidad suficiente para invalidar lo actuado, circunstancias que permiten emitir el pronunciamiento de fondo que se reclama para dirimir esta controversia.

Resulta indudable, que la obligación alimentaria tiene su fuente en la propia ley, como se verifica del contenido del núm., 5º, del Art. 411 del Código Civil, que fue modificado por la Ley 75 de 1.968, según el cual, los hijos son titulares de este derecho.

Jurisprudencialmente se ha establecido que los presupuestos de la pretensión alimentaria, se contraen, al parentesco, la necesidad del alimentado, y la capacidad económica del mismo.

En lo que respecta a la relación filial que une a LUZ ADRIANA CUERVO HOLGUIN para con ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO y JAVIER BERNAL CUERVO a la fecha mayores de edad, hay plena certeza de ello, dado que se encuentra demostrado formalmente con la copia de los registros civiles de nacimiento, documentos expedido por autoridad competente. Calidad legal (de hijos) que los legitima para exigir alimentos a quien por ley está en la obligación de proveérselos, estando en dicho rango la aquí demandada de conformidad con el artículo 411, numeral 2 del Código Civil.

Sin embargo, este solo hecho no es suficiente para predicar la exigencia y obligación de pedir y suministrar alimentos, en efecto, debe existir la *necesidad alimentaria*, que la persona que solicita los alimentos no cuenta con los medios necesarios para proveerse su propia subsistencia o que sus medios

con que cuenta no le son suficientes para vivir dignamente y de otra parte debe valorarse la situación económica y las facultades de llamado a satisfacer los alimentos, sin perder de vista que la obligación, para este preciso caso, es compartida por ambos padres.

Al tenor del Código Civil, la obligación alimentaria se presenta para garantizar al alimentario (beneficiario) el sustento mínimo de vida, junto con su modesta subsistencia dentro de su entorno y posición social. De común conocimiento es la obligación alimentaria de los padres para con sus hijos, pues es más que evidente que el desarrollo natural de la vida le imprime un sentido de protección a la infancia y la adolescencia, épocas de crecimiento y consolidación de valores y gustos. El apoyo paternal a este respecto resulta indispensable no solo desde una perspectiva psicológico-emocional, sino que además se convierte en una cuestión económica si se reconoce que la consolidación de valores cívicos, culturales y académicos, se encuentra en la apropiada educación y apropiación del entorno propio de un sujeto.

Esto quiere decir que las costas provenientes de la subsistencia, la educación y el acoplo al contexto social, tienen que darse por vía de beneficio, pues sería inocuo pretender que una persona en busca de su proyecto de vida pueda brindarse por si mismo este autónomo beneficio. En este sentido, podría inferirse que cualquier sujeto que pueda valerse por sus propios medios en orden a proponerse un propio proyecto de vida y sustentarlo económicamente de acuerdo a su voluntad y capacidades, no requiere de tal apoyo garantista de sus intereses, pues en su oportuna ocasión tuvo que habérsele brindado el soporte primordial para la obtención de la integral autonomía de la que ahora goza.

De esta última afirmación proviene la limitación temporal que se le imprime a esta obligación legal indispensable y que puede ser leída y observada en nuestros preceptos legales, los artículos 413 y 422 del Código Civil son tajantes en poner como límite de necesidad, la edad de 21 años (La ley 27 de 1977 estableció la mayoría de edad a los 18 años) en el entendido de que en esta etapa de la vida un individuo normal ha alcanzado unas calidades aptitudinales para afrontar el mundo adulto. A este respecto, el inciso segundo del artículo 422 a la letra reza: *“Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que, por algún impedimento corporal o mental,*

*se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitaré, revivirá la obligación alimentaria”* (apartado subrayado declarado exequible condicionalmente entiéndese que también se refiere a cualquier mujer).

Vale resaltar que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, no ha hecho una interpretación exegética de este imperativo y por el contrario ha ampliado su alcance coligiendo que la obligación alimentaria de un padre para con sus hijos puede extenderse temporalmente hasta que el sujeto cumpla veinticinco años de edad, siempre que se verifique la insubsistencia personal por encontrarse el individuo cursando sus estudios profesionales. Argumento completamente concordante con la finalidad propia de la figura de los “*alimentos*”, pues son estos los que le permitirán al individuo sustentar sus calidades económicas para soportar su educación.

### **Caso en concreto**

Teniendo en cuenta lo brevemente expuesto y concerniente al caso que nos atañe en esta ocasión, hay que recalcar cuatro aspectos importantes:

- En primer lugar, **ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO**, actualmente cuenta con 21 años.

.- Por su parte, **JAVIER BERNAL CUERVO**, cuenta con 19 años.

- En segundo lugar, se tiene que no hay evidencia contraria a la plena capacidad corporal y mental de los demandantes, para darse su propia subsistencia.
- 

Hechas las anteriores precisiones se procede a lo preceptuado en el Artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual nos indica que la carga de la prueba, le corresponde a la parte interesada, toda vez que la parte actora debe probar los fundamentos de hecho de su pretensión. De igual forma, el artículo 164 ibidem, refiere que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

En efecto, a pesar de los varios requerimientos efectuados a los demandantes para que acreditaran que se encontraban estudiando, no fue posible al igual que el profesional del derecho que los representa los requirió igualmente para que aportaran las correspondientes certificaciones de estudio, desatendieron esos requerimientos.

Téngase en cuenta, que el mismo apoderado en la última diligencia indico que la demandante **ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO**, no se encontraba estudiando y que el alimentario **JAVIER BERNAL CUERVO**, se encontraba en el ejército, que ha tratado de hablar con la parte que representa, pero que no se han vuelto a comunicar con él, que la ultima comunicación que sostuvo con el inicialmente demandante y padre de los alimentarios no tenía interés en el proceso.

Otra de las manifestaciones que elevo el apoderado es que la señorita **ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO**, no se ha comunicado con el para que le manifieste si va a estudiar o no.

Por lo anteriormente expuesto, considera el despacho, tal y como lo ha manifestado el apoderado, que no existe interese en el trámite del presente proceso por los demandantes.

De conformidad con el art. 164 del Código General del Proceso, *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”*.

Por su parte el artículo 167 del Código General de Proceso, nos indica con meridiana claridad: *“Incumbe a las partes el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”*

Al respecto la Corte Suprema de Justicia dice: *“... Si el interesado en dar la prueba no la hace, o la da imperfecta, o se descuida o se equivoca en su papel de probar, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones...”* (C.S.J., sentencia 16 de julio de 1.986).

En términos parecidos se indicó: “...relativo a la necesidad de la prueba, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y el artículo 167 agrega que Incumbe a las partes litigantes demostrar todos aquéllos hechos que sirven de presupuesto de las normas que establecen los efectos Jurídicos que ellos persiguen; norma esta que consagra el principio de la carga prueba, la cual no es otra que una regla de conducta para las partes, por que Indudablemente les señala cuáles son los hechos que a cada una interesa probar para que sean consideradas como ciertas por el Juez y se logre el buen suceso de sus pretensiones.

***De esta forma, quien pretenda obtener éxito en las pretensiones deducidas en la demanda no sólo está en la necesidad sino que soporta la carga procesal de demostrar oportunamente y mediante prueba idónea los supuestos de hecho en que se las apoya. En caso contrario, deberá sufrir los efectos de Incumplimiento de dicha carga, que no son otros que los resultados jurídicos perseguidos resulten adversos***”. - negrilla fuera del texto, por el Despacho - (Sentencia de febrero 13 de 1.985, magistrado ponente Horacio Montoya Gil).

Siendo así las cosas cabe concluir que las pretensiones incoadas por **ANGIE PAOLA BERNAL CUERVO y JAVIER BERNAL CUERVO**, no cumplen con los presupuestos legales de la norma previamente citada, o de la jurisprudencia concordante, en orden a determinar que no cuenta con los medios propios para garantizarse su subsistencia o pleno desarrollo.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en las consideraciones de este fallo.

**SEGUNDO:** Sin Costas.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, identifying Cesar Enrique Osorio Ortiz.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ  
JUEZ

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA, BOGOTÁ D.C.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARÍA

Bogotá D.C., 11-11-2020

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO N° 75

TOMAS OLAYA GONZÁLEZ